

### **“Las universidades no compiten bajando aranceles”**

Más adelante, el académico abordó la problemática de la educación universitaria vista como bien público o bien privado y señaló que sería recomendable que el país optara por uno de los dos. Esto es como un bien de consumo, el cual se pagaría solo porque se trata de una inversión en capital humano (mal argumento, a juicio de Meller) o como un bien para aumentar la competitividad del país y generar un salto en ella y disyuntiva ante la cual el experto aseguró que la educación universitaria es un mix público-privado, cuya composición dependerá de las preferencias de la sociedad.

“Antes (1960) la educación superior se consideraba un bien público y todos estudiaban gratis. Ahora, a partir de la ley de 1981, es un bien privado y hay que pagar por él”, indicó Meller agregando que en el caso de Chile, y en lo que toca al Estado, la inversión en este frente debiera aumentar por lo menos a un 1% del PIB -US\$1.000 millones anuales-, sólo para la parte docente y aparejado a una baja en los aranceles en igual porcentaje.

El problema, explicó el académico, es que los aranceles sólo suben (5% real sobre el IPC) generando, lo que llama, el mercado competitivo de “las carnicerías”.

“Las universidades no compiten bajando aranceles. Compiten por infraestructura, avisaje en diarios y revistas, y fotos en las páginas sociales. Se trata de una carrera ‘armamentista’ con incremento en los aranceles y nulo efecto en la calidad de la educación”, afirmó.

De aquí su llamado a transparentar la estructura de costos detrás de las universidades con y sin fines de lucro, además de los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica (CFT), y a regular los aranceles -tal como lo hacen Inglaterra y Australia- utilizando un índice único de reajustabilidad (racionalidad económica) y no dos distintos (aranceles de referencia y efectivos).

“El uso de aranceles parejos en sociedades inequitativas como la nuestra es retrógrado. (...) Estados Unidos aplica aranceles diferenciados según capacidad de pago”.

Un camino, anunció Meller, es utilizar los aranceles diferenciados en la educación secundaria como referencia. Una base que, de acuerdo a su experiencia, requiere contestar necesariamente a la pregunta sobre qué tipo de universidad queremos, de manera de determinar a quiénes se les transfieren los fondos públicos. Porque es muy distinto, advirtió Meller, querer universidades con investigadores que universidades únicamente con docentes y decisión que ejemplificó con el caso de Estados Unidos que tiene 4.000 universidades, de las cuales una proporción minoritaria realiza investigación. Y de aquí también su valoración por el sistema norteamericano de *college* que le muestra a sus alumnos el menú de alternativas disponibles.

“En Chile, en cambio, lo que tenemos es un conjunto de facultades con alta deserción de alumnos y extensión de las carreras. Necesitamos un enfoque de formación

permanente. Una autopista de aprendizaje que incluya flexibilidad, modularidad y transportabilidad. Ahora es el todo o nada”, concluyó.

Por último, llamó la atención sobre la demanda de los estudiantes por una Educación Superior gratuita.

“Estamos hablando de US\$ 3.600 millones de dólares anuales, sin contar a los Institutos Profesionales y a los CFT, caso en el cual sube a US\$ 4.000 millones y considerando que la Educación Superior representa el 17% del país”.